

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACION - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MANUEL ADAN MORENO MONTOYA
DEMANDADOS	PRODUCTOS VITELA S.A.
RADICADO	05360-31-05-002-2017-00473-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Laboral individual, contrato realidad, prestaciones sociales y vacaciones, , indemnización moratoria por no consignación de cesantías.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **MANUEL ADAN MORENO MONTOYA** contra la Sociedad **PRODUCTOS VITELA S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto,

de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 025**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, en la audiencia pública celebrada el día el 20 de mayo 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: En Abril de 1990 el actor fundó la empresa PRODUCTOS VITELA S.A. y además comenzó a trabajar en el departamento técnico desarrollando diseños de máquinas e instalándolas; fue el encargado de asesorar a los empleados en el proceso de creación de telas no tejidas, de desarrollar e incrementar la capacidad de producción de la compañía a lo largo de los años a partir de su doble calidad de accionista y trabajador y, en tal sentido, el empleador PRODUCTOS VITELA siempre cumplió con sus obligaciones laborales de salarios, prestaciones sociales y seguridad social con el demandante. No obstante, en el año 2008, la administración de la empresa fue entregada a las hijas ANA MARIA MORENO Y MARGARITA MORENO, quienes asumieron el manejo total de la empresa y fueron quienes se ocuparon de la contratación de los empleados, entre ellos, de la contratación del demandante, comenzando a incumplir sus obligaciones legales mínimas.

Refiere el introductorio que entre el demandante y la empresa accionada se perfecciono de manera verbal un contrato individual de trabajo a término indefinido desde mil novecientos noventa y tres (1993); la prestación personal del servicio fue ejecutada bajo subordinación continua de la empresa demandada; en toda la relación laboral el Señor Moreno ha tenido un cargo de dirección, confianza y manejo, siendo jefe técnico de la empresa, diseñando de máquinas y equipos gracias a su incalculable experiencia adquirida en diferentes países del mundo en la fabricación de telas no tejidas; las labores

encomendadas fueron ejecutadas de manera personal y directa, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de trabajo señalado por este, no obstante su calidad de empleado de control, confianza y manejo, sin que se llegare a presentar queja alguna o llamado de atención en su contra; que el horario cumplido por el actor es de de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde; la relación inició en mil 1993 y en la actualidad tal relación se sostiene.

Aduce el demandante que su salario fue modificado a través del tiempo. así: Desde 1993 hasta 2013, \$2.500.000; de 2013 a enero de 2016, \$8.000.000; y desde enero de 2016 hasta agosto de 2017, la empleadora no ha cancelado salarios; que en él confluyeron en algún momento la doble calidad de accionista y empleado, calidades distintas entre sí y no excluyentes, que determinan una serie de obligaciones y derechos en cabeza suya. Indica que, a partir del 2013, el salario es pagado en especie, pues sus hijas ANA MARIA Y MARGARITA MORENO, con dicho salario, le pagan obligaciones de su sostenimiento, como son los servicios públicos, el apartamento, los impuestos, pero que esto nunca se estipuló ni se acordó entre el empleador y el trabajador; el actor continúa con sus labores toda vez que nunca ha recibido una carta de despido, ni se le ha notificado la cesación de sus funciones; ama su lugar de trabajo y asiste cada mañana al cumplimiento de sus labores.

Señala el actor que en 2013 el empleador le hace firmar un documento titulado “*contrato de prestación de servicios*”, nuevo contrato que disfraza el contrato laboral existente y subyacente, pues sigue prestando sus servicios personalmente, está sujeto a la subordinación y, además, percibe remuneración; que, en razón de dicho contrato aparente, se ve gravemente perjudicado en sus derechos laborales puesto que, como tiene contrato de prestación de servicios, no le pagan sus prestaciones sociales; ello, hasta el año 2016, donde inauditamente le dejan de pagar su salario; que desde 2013, y hasta la actualidad, no se han pagado las prestaciones sociales, señalando, además, que el empleador no consigna las cesantías desde el 2010; por lo que tiene derecho al pago de la mora por la no consignación de las cesantías en el fondo correspondiente; actualmente no se le paga salario ni prestaciones

sociales y, no obstante, sigue asistiendo a laborar todos los días, cumpliendo con sus funciones en su lugar habitual de trabajo; hasta el momento de presentación de la demanda PRODUCTOS VITELA S.A. no ha presentado notificación de terminación del contrato, por lo que se siguen generando salarios y prestaciones correspondientes.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE la existencia de la relación laboral a término indefinido entre el señor MANUEL MORENO y la compañía PRODUCTOS VITELA S.A., desde el año 1993 y hasta la actualidad; que se condene a la demandada al pago de los siguientes conceptos: Primas de servicio al actor desde el año 2013 y hasta 2017, así como, las que se causan mientras subsista la relación laboral; las vacaciones desde el 2013 hasta el año 2017, y las que se causen mientras subsista la relación laboral; las cesantías correspondientes al año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, y las que se causen durante la relación laboral, intereses a las cesantías; la indemnización moratoria por la no consignación de cesantías; a partir del primer día del mes 25, intereses a la máxima tasa bancaria sobre la indemnización anterior; los salarios adeudados desde 2016 hasta la fecha, y mientras subsista la relación laboral; la indexación de las sumas anteriores al momento de la cancelación total de las mismas.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda, la Sociedad accionada dio respuesta oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y, frente a los hechos, acepta que el actor fue fundador, con su esposa e hijos, de la sociedad demandada, indicando que, a causa de malas administraciones, hubo cambios en su administración y sucesivas cesiones y ventas de acciones, quedando el demandante con el 2.61 % de la misma; respecto del contrato de trabajo que indica el actor, manifiesta que no es cierto y que, en todo caso, de haberse configurado un contrato de trabajo, los derechos derivados del mismo prescribieron, aduciendo, además, que el demandante se desvinculó de la actividad empresarial desde el 2012 y que como fundador (con 88 años) esporádicamente va a la sede a tomar tinto,

leer, etc., sin ningún cargo ni actividad en favor de la empresa; explica que, desde su retiro de la empresa, sus accionistas decidieron velar por él, por su seguridad social y sostenimiento, apelando a la figura de contratación de servicios personales, de carácter simulada, como confesó el actor en documento que se anexa, en el que manifestó al Municipio de Medellín, Departamento de Industria y Comercio, que desde hace varios años no ejerce actividad comercial, empresarial o industrial alguna.

Reitera no ser cierta la contratación laboral, a término indefinido, que indica el demandante, señalando que éste no ha sido subordinado de nadie, no tiene asignada una jornada laboral, reiterando que desde hace más de 6 años, teniendo como referencia la contestación de la demanda, pasó al retiro y dejó de ejercer actividades comerciales; que desde el mes de septiembre de 2015 a febrero de 2016 tuvo en el papel una vinculación de orden laboral, solicitada por el demandante, pues manifestó su necesidad de ser sacado de del sistema de seguridad social debido a una situación de declaración del impuesto ICA; admite que hasta el año 2012 el demandante figuraba en la nómina con un salario de \$2.500.000, resaltando que de ello ya han pasado más de 3 años por lo que considera que cualquier derecho laboral está prescrito; que los contratos de prestación de servicios que se firmaron en abril 13 de 2013 y febrero 2 de 2014 fueron simulados, como se indicó, y que, como se comprueba con las declaraciones de renta del actor, de los últimos 3 años, no ha figurado como persona con ingreso de salarios, salvo 4 meses de 2015 y 2 meses de 2016.

Insiste que el supuesto contrato de prestación de servicios personales fue simulado, que en el año 2012 el actor se retiró de la empresa realizándose el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, y que por razones fiscales, no laborales se firmó un contrato laboral desde el mes de septiembre de 2015 al mes de febrero de 2016, y se liquidó y pagó la supuesta liquidación; que durante la época en que el actor tuvo relación laboral con la empresa siempre le fueron consignadas las cesantías, en el fondo correspondiente y que, en todo caso, cualquier derecho al respecto ya prescribió.

Propuso en su defensa la excepción de fondo de prescripción.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 20 de mayo de 2019, la señora JUEZ DE CONOCIMIENTO profirió sentencia mediante la cual DECLARÓ que entre el señor Manuel Adán Moreno Montoya y Productos Vitela S.A., existió un verdadero contrato de trabajo en el período comprendido entre el 1° de enero del año 2013 y el 31 de diciembre del año 2014. CONDENÓ a la demandada a reconocer y pagar al actor los siguientes conceptos: Por cesantías, \$32.000.000; por intereses a las cesantías, \$1'136.000; por prima de servicios, \$9'466.666; por vacaciones, \$8'000.000; y por sanción por no consignar las cesantías a un fondo, \$113'333.332. Además, condenó a la demandada a reconocer y pagar la indexación de las condenas, absolvió a la demandada de las demás pretensiones de la demanda; declaró probada parcialmente la excepción de prescripción; y condenó en costas a la parte demandada, fijando las correspondientes agencias en derecho.

Como fundamento de su decisión, partió la falladora de indicar los elementos esenciales del contrato de trabajo a que hace referencia el artículo 23 del CST, esto es, actividad personal, continuada dependencia y subordinación, elemento diferenciador frente a otros contratos, civiles o comerciales, y el salario como remuneración del servicio, haciendo alusión a la presunción legal establecida en el artículo 24 de la misma normatividad que indica que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Indica que no existe duda de que el actor, según confesión que realiza la parte demandada en respuesta al hecho primero, fue fundador de la sociedad demandada y que, en virtud a los cambios que se presentaron en la administración y sucesivas ventas y cesiones de acciones, actualmente cuenta con una partición del 2.61%; que tampoco hay discusión que el señor Moreno Montoya prestó sus servicios personales bajo un contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre del año 2012, como es confesado por la parte activa en los fundamentos del hecho noveno y se prueba además con la liquidación definitiva de prestaciones sociales de folio 51, debiendo entonces resolverse si, a partir del 1° de enero del año 2013, que cambió la modalidad contractual a uno de

prestación de servicios se configura realmente un contrato de trabajo, y hasta cuándo se desarrolló.

Que se advierte de los contratos de prestación de servicio que se allegaron (Fol. 53 y 54) que, efectivamente, para los años 2013 y 2014 el actor desempeñó sus servicios como Ingeniero de Diseño, sin que haya duda que existió una prestación personal de servicios, pues, indica, así lo ratifica la prueba testimonial, e, incluso la parte demandada al señalar que hasta el año 2014 prestó sus servicios como jefe de mantenimiento, como lo aseveró la testigo Mónica María Hincapié Rivera y lo confesó la representante legal de la sociedad demandada al señalar que su padre prestó sus servicios personales hasta el año 2013, pero más adelante admite que el año 2014 participó en el diseño de un programa de limpieones, lo que para significa que esta actividad la desarrollo en cumplimiento de las funciones contratadas, momento para el cual existía el taller de mantenimiento donde el actor, desde antes, venía desempeñando sus funciones y bajo las mismas condiciones del contrato de trabajo que se había finalizado en el año 2012; que así lo corrobora la testimonial de la cual se extrae que el taller de mantenimiento y diseño, en el cual el demandante se desempeñó como jefe de mantenimiento, se desmontó únicamente a partir del año 2014, afirmaciones que son ratificadas por el actor al confesar en su interrogatorio de parte que efectivamente él tuvo personal a cargo pero únicamente hasta el año 2015 aproximadamente, cuando cambiaron las actividades en el área de diseño, por lo que concluye que quedó debidamente acreditado que el señor Manuel Adán Moreno Muñetón prestó un servicio personal para la sociedad demandada, situación que se enmarca en el contexto de la configuración de la presunción del artículo 24 del código sustantivo trabajo, correspondiendo a la parte demandada desvirtuarla y acreditar que la relación no fue de naturaleza laboral.

Señala que, para la judicatura, no se desvirtuó tal presunción, ya que con la prueba recaudada se probó que el lugar de prestación del servicio era las instalaciones de la sociedad demandada, en el taller de diseño y mantenimiento de máquinas, en el que permanecía allí el demandante todo el día, tenía un personal a su cargo y recibía una remuneración por el servicio prestado, lo que denota un contrato de trabajo; que ninguna prueba se aportó tendiente a

acreditar la independencia del demandante en el desarrollo de su oficio, pues, si bien la representante legal de la compañía alega que esas contrataciones se dieron bajo las directrices de su padre, ello no quedó acreditado en el proceso, como tampoco, que haya sido una decisión que se tomó por la junta directiva de la empresa, como consecuencia de la voluntad de la sociedad de accionistas de la cual hacía parte el demandante.

Indica que la prueba que obra en el plenario tiene la conducencia y la pertinencia para demostrar los extremos de la relación jurídica sustancial que se predica, de un lado, porque así lo confesó la representante legal de la entidad accionada cuando señala que su padre prestó sus servicios personales hasta el año 2013, advirtiendo a continuación que en el año 2014, incluso, llegó a participar de un proyecto que fue implementado en la sociedad, y lo ratifica la prueba testimonial al concluir que el demandante se desempeñó como jefe de mantenimiento hasta el año 2014, que se desmontó el taller, y con los contratos de prestación de servicio, el último de 2 de febrero del año 2014, por lo que, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre la forma, se debe declarar que el demandante, a partir del 1º de enero del año 2013 y hasta el 31 diciembre del año 2014, se desempeñó como un verdadero trabajador en la sociedad demandada.

Que, sin embargo, a la misma conclusión no se puede arribar a partir del 1º enero del año 2015, como lo señala el actor, pues la prueba asistió a la sociedad demandada, pues la prueba testimonial es clara al señalar que el lugar de trabajo esto es el taller de diseño y mantenimiento de máquina donde se desempeñaba el trabajador como ingeniero de diseño se desmontó en el año 2014, no teniendo personal a su cargo, como también lo señaló el demandante en su interrogatorio, pues a partir de año 2015 cambiaron todas las condiciones y que ya no tenía personal a cargo, por lo que, en su sentir, queda sin fundamento probatorio el elemento de prestación de servicios; que no existe duda que el actor continuó asistiendo a la compañía, donde permanecía en su oficina, y que a partir del año 2016 sólo asistía unas horas en la mañana, situación que era permitido por las directivas de la sociedad, pues no se desconoce que, como socio y fundador de la empresa y padre de la representante legal y accionista mayoritaria, existían lazos familiares muy

fuertes, resaltando que se está en una relación padres e hijos, que por desavenencias surgieron diferencias que han llegado a esta instancia; resalta que por esa posición familiar, le era permitido el ingreso a la empresa, como socio fundador y que, como lo relatan los testigos, era reconocido como el dueño de la empresa.

Señala que, aunque no se desconocen las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales, a folios 73 y 74 del plenario, que indican la existencia de un contrato de trabajo entre el 1º de febrero del año 2015 y el 31 de diciembre de ese año y del 1º de enero al 29 de febrero del año 2016, como incluso lo manifestó el actor en la documental allegada a la tesorería del municipio de Medellín, de folio 80, documento que no fue tachado, no existe prueba que acredite que el demandante prestó un servicio personal diferente a partir del primero de enero del año 2015 o con posterioridad al primero de febrero del año 2016, para que se genere una conclusión diferente a la que llegó el despacho; que es más, con estas liquidaciones se tendría que si en esos períodos se pudo haber prestado un servicio, que insiste no quedó debidamente acreditado, las obligaciones que de él se generaron quedaron satisfechas con las liquidaciones que se allegaron al plenario.

Que, en ese orden de ideas, y demostrada la existencia del contrato del trabajo, como se indicó, y realizada la manifestación por la parte demandante del no pago de los derechos laborales causados, dicho que constituye una afirmación indefinida que no requiere prueba(artículo 167 del CGP), al no haberse desvirtuado dicha afirmación por la sociedad demandada mediante los respectivos comprobantes de pago, encontrando la excepción de prescripción propuesta por la demandada probada en relación con los derechos causados antes del 24 de octubre del año 2013, esto es, 3 años anteriores a la presentación de la demanda, la cual no afecta las cesantías, que se hacen exigibles a la terminación del contrato, tomando como salario base la suma de \$8,000,000, según los contratos de prestación de servicios siendo la remuneración mensual que percibía el actor para el año 2013 y 2014, corroborado por la jefe de gestión humana al informar que el demandante hasta el año 2014 devengó esa suma.

En cuanto a las cesantías, que reclama la parte activa desde el año 2010, señala que, según certificado emitido por la AFP Porvenir S.A. (fol. 14), la última suma consignada por este concepto fue el 16 de febrero del año 2011, es decir que esta consignación correspondía a las cesantías causadas desde el año 2010, por lo que concluye que le asiste derecho al actor a que se le reconozcan las cesantías causadas a partir del primero de enero del año 2011 y hasta el 31 de diciembre del año 2014, pues, según liquidación de folio 51, ni siquiera en esa oportunidad se le reconocieron las cesantías causadas en ese contrato que finalizaba en el año 2012, condena que asciende a la suma de \$32'000000. Por intereses a las cesantías, aplicando la prescripción antes indicada, estos se liquidan a partir del 24 de octubre de 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2014, condena que asciende a la suma de \$1'136.000; que, la prima de servicios, que se reclama desde el año 2013, aplicando también la prescripción antes aludida, y que conforme a lo indicado en el literal A del artículo 306 del CST, la liquida en cuantía de \$9'466.666. En relación a las vacaciones de 2013 y 2014, indicó que no operó el fenómeno de la prescripción, por lo que las cuantifica en la suma de \$8.000.000. adeuda al demandante la suma de \$8'000.000

Respecto a la indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990 advirtiéndole que de tiempo atrás se ha dicho que no procede en forma automática, por lo que son las circunstancias de cada caso concreto las que permiten valorar las razones por las cuales el empleador incumplió con la obligación de consignar anualmente las cesantías en un fondo, resalta que, para acreditar la buena fe, no basta la simple manifestación efectuada por el empleador demandando de que ha obrado de buena fe, pues es necesario que las razones que plantea tengan la fuerza suficiente para justificar su incumplimiento y que, además, sean probadas, lo que no ocurrió en este caso; que la demandada; que no cuenta el despacho con elementos probatorios con base en los cuales pueda justificar la actuación del demandado al omitir consignar las cesantías en un fondo durante la vigencia del contrato, como ocurrió como las causadas en 2011 y 2012, como era su obligación legal, y que luego, a pesar que las condiciones laborales continuaron, se realizaron contratos de prestación de servicio, disfrazando la relación laboral, por lo que la demandada actuó de mala fe; en virtud del termino prescriptivo calculó tal

indemnización desde el 24 de octubre del año 2013 hasta el año 31 de diciembre del año 2014, un día de trabajo por cada día de retardo por la falta de esta consignación, condena que cuantificó en la suma de \$133'333.332. Ordenó, además, la indexación de las condenas, absolvió a la demandada de la pretensión de pago de salarios y demás conceptos laborales desde el año 2016, en atención a que no se acreditó un vínculo laboral a partir de esa fecha , y condenó en costas a la pasiva.

VI. – APELACIÓN

Contra la sentencia de primera instancia los apoderados de las partes interpusieron recurso de apelación en los siguientes términos:

Parte demandante:

Manifiesta su inconformidad con el fallo de primera instancia, en cuanto solo declaró la existencia del contrato de trabajo hasta diciembre de 2014 pues considera que se dejaron fuera algunos elementos; el primero, la confesión de la representante legal de la empresa demandada, pues en su declaración establece que el taller se desmontó desde el año 2014 al año 2016, admitiendo que tal desmonte no fue de inmediato, sin que fue de forma paulatina, hasta 2016 que terminaron de desmontar y uno de esos trabajadores quedó como trabajador de la compañía.

Resalta que, si se admite que su lugar de funciones era el taller de diseño cuyo desmonte se prolongó hasta el año 2016, su lugar de trabajo y sus funciones aún se conservaban, así fuera en menor medida; que, de igual forma, durante este tiempo se firmaron otros contratos de trabajo que generan una presunción, pues, si bien está la presunción de que pudo haber unos pagos de liquidación de prestaciones sociales, también se genera la presunción de que había prestación personal de servicio, señalando que esos documentos fueron aportados por la parte demandada; que esa prestación del servicio, posterior al 31 de diciembre de 2014, no fue interrumpida, y que la prueba permite inferir que del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2015 y del 1 de enero de 2016

al primero de febrero del 2016 había prestación personal del servicio y no hubo cambios sustanciales, por lo que la prestación personal va a hasta esa fecha.

Indica que, adicionalmente, con los testigos se comprueba que el señor Adán en ese tiempo cumplía con los horarios ya establecidos desde antes, desde las 8 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, horario que sólo cambio en el 2016; que en el documento allegado a folio 20 del expediente se establece una directriz laboral establecida por Ana María Moreno, como representante legal, al señor Manuel Moreno el 9 de julio del 2017, de lo que se deduce que hay una orden de una prestación personal del servicio hasta esa fecha, 9 de junio del 2017, en la que todavía existía una relación laboral.

Señala la censura que correspondería a la parte demandada comprobar algún tipo de interrupción en esos tres períodos de tiempo, es decir, algunas meses en los cuales en realidad no hubiera prestación personal del servicio, lo que no demostró; que, además, sobre el desmonte del taller que se dio entre el año 2014- 2016, aclara que, si bien la representante legal o algunos administradores de la empresa demandada habían supuestamente dado la orden a los trabajadores de que no hicieran caso lo que decía el señor Adán, eso no se concretaba, pues el señor Adán seguía dando las ordenes y ellos las cumplían, seguía con su rutina diaria yendo a los talleres, revisando máquinas, dando instrucciones a los mecánicos.

Concluye de lo anterior que en realidad sí existe un contrato de trabajo más allá del 31 de diciembre del 2014 y que, por lo tanto, las condenas deberían extenderse, tanto en las cesantías, como interés de las cesantías, en la prima y en las vacaciones hasta dicha fecha, lo mismo la mora en las cesantías, estimando que la pretensión quinta del libelo demandatorio, debía ampliarse a fin de generar Mora por cada una de las obligaciones de cesantías, no de forma conjunta sino de forma individualizada.

Parte demandada:

Señala que la empresa demandada no ha negado que en años pasados el demandante le prestó sus servicios, pero ha sido clara en su posición, con los documentos acompañados con la contestación de la demanda, que la

prestación de los servicios fue debidamente liquidada por el período comprendido hasta el 29 de febrero del año 2016; que, en ese sentido, el fallo que se ha dictado y que apela, va en contradicción con esos documentos aportados debidamente al proceso y que fueron firmados en señal de aceptación por el demandante.

Resalta que los tres elementos para configurar un contrato de trabajo, deben ser la prestación de un servicio, la remuneración de ese servicio y la subordinación en la prestación del servicio y, en su concepto no se han estructurado estos tres factores, porque los propios declarantes del demandante no acreditan ningún factor en este sentido, como sí lo hicieron los testimonios de las personas que a nombre de la parte demandada rindieron su versión en el sentido que, en los últimos años, el señor Manuel Adán no prestó servicios a productos Vitela, ni recibió ninguna remuneración, ni existió subordinación de parte de él.

Que tampoco analizó la sentencia el documento de folios 80 en donde el propio demandante le manifestó al municipio de Medellín, Secretaría de Hacienda, que él sí prestó en el pasado algunos servicios de asesoría a productos Vitela, pero que en la fecha de esa comunicación, 30 de marzo del 2016, no prestaba servicio.

Indica que por esa razón considera inconducentes las condenas que se han impuesto a la compañía, sobre todo en materia de cesantías y de supuesta indemnización moratoria por el no pago de las cesantías

Alegatos de conclusión en segunda instancia:

En el término concedido, las partes no presentaron alegaciones.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Contrato realidad, prestaciones sociales y vacaciones, indemnización moratoria por la no consignación de cesantías.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia, teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes en los recursos de apelación interpuestos, consisten en: (i) Determinar si, contrario a lo dispuesto por la falladora primaria, como lo pregona la parte demandada, entre las partes no existió una relación laboral en los últimos años, entiende la sala en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, y de ser así, si hay lugar o no al pago de cesantías, de la indemnización moratoria y demás conceptos laborales a la que fue condenada la pasiva en la sentencia que se revisa. También se establecerá si, como lo señala la activa, la relación laboral entre los litigantes se extendió hasta el año 2016, por lo que hay lugar a condenar a la demandada al pago de cesantías, de la indemnización moratoria, y demás prestaciones, hasta ese año; (ii) y si indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1950 se debe liquidar no en forma conjunta, sino en forma individual, por cada período anual.

De cara al primer problema jurídico, cabe recordar que el artículo 23 del CST determina los elementos que configuran el contrato de trabajo así:

- a) Actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por sí mismo.
- b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono.

c) Un salario. Como retribución del servicio.

En ese orden de ideas, es claro que para la existencia válida de una relación laboral contractual es necesario que concurren los tres elementos antes reseñados, sin importar la denominación que los contratantes impongan al mismo, circunstancia que tiene sustento Constitucional en el artículo 53 superior que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; de no serlo así indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a la ley laboral.

Por su parte, el artículo 24 del C.S.T. consagra una presunción legal, según la cual *“toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”*, y la consecuencia de su aplicación, no es otra que la inversión de la carga de la prueba, es decir, una vez demostrada por la parte actora la prestación personal de servicios en favor de parte la demandada, dentro de unos determinados extremos temporales, incumbe a esta última desvirtuar la existencia del vínculo presumido, a través de los medios probatorios legalmente establecidos, esto es, probar que dicha prestación de servicios no fue subordinada ni dependiente.

Ahora, pese a la presunción legal a la que se ha hecho referencia, para la declaratoria del contrato realidad, corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario y el hecho el despido, cuando éstos 2 últimos se aducen, entre otros aspectos, tal como ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (ver, entre otras, la sentencia del 4 de noviembre de 2015, SL 16110-2015).

Como puede advertirse, es claro que el elemento de la actividad personal, que es el pilar de la relación laboral y en el que se finca la presunción del artículo 24 del CST, debe encontrarse plenamente probado en el proceso por la activa, de conformidad con lo establecido en el canon 167 del CGP.

En el sub examine, como acertadamente concluyó el a quo y admiten las partes, no hay duda alguna que, hasta el 31 de diciembre de 2012 y desde 1993, entre los litigantes existió una relación laboral.

No obstante, el demandante afirma en el libelo introductorio que dicho contrato de trabajo, que inició en 1993, para la fecha de presentación de la demanda aún se encontraba vigente, señalando en el hecho noveno que, en el 2013, el empleador le hizo firmar un contrato de prestación de servicios, que, dice, disfraza el contrato laboral existente y subyacente, pues el demandante siguió prestando sus servicios personalmente, en forma subordinada.

La parte demandada señala que el contrato de prestación de servicios fue simulado, pues, como confesó el actor ante el Municipio de Medellín, en los últimos años no ejerce ninguna actividad empresarial, industrial o comercial.

Al respecto, es pertinente indicar que, a folios 53 y 54 obran sendos contratos de prestación de servicios, celebrados entre las partes, para realizar tareas de diseño industrial, uno, el 2 de abril de 2013, por 12 meses, y otro, el 2 de febrero de 2014, también por 12 meses, pactándose en ambos, como valor del contrato, la suma de \$8'000.000 mensuales.

Ahora, la representante legal de la compañía, a la vez hija del actor, señora Ana María Moreno Muñetones, en el interrogatorio que absolvió, ante la pregunta sobre en qué calidad iba el señor Manuel a la empresa entre el año 2013 a la fecha de su declaración, respondió que su padre ha ido, a partir de 2014 como socio fundador, para disfrutar de un tiempo allá en su oficina, espacio que acomodaron con televisor, con varios canales de televisión porque pasaba largas horas viendo Discovery Chanel, History Chanel, una silla reclinomatic, nevera propia, porque su padre, como persona jubilada, tenían que entregarle ese espacio para que saliera diariamente, pero que no cumplía horarios, no tenía personas a cargo, ni funciones ni plan de trabajo determinado, ni un jefe inmediato. Aduce que comenzaron a desmontar el taller de metalmecánica, que efectivamente él manejó hasta el 2014, ese año, despidieron varios mecánicos, no todos, reubicaron las máquinas, y el taller se cerró definitivamente en el 2016; insiste que en ese tiempo el actor no realizaba

funciones, ni tenía personas a cargo; que hasta hace pocos días va en las mañanas, sin un horario específico; precisa que después de 2013 él iba todos los días, en horario matutino, pero sin tener un horario exacto, se quedaba 2 o 3 horas, llegaba 9:30 o 10:30 se iba a las 11:30 o 12:00; que, además, su papá se ausentaba largos períodos, a Cartagena, durante todos estos años, para hacer descanso. Con relación a los contratos de servicios de los años 2013 y 2014, respondió que, como su padre estaba jubilado, suscribieron dos contratos, uno como empleado y otro como prestador de servicios, porque él tenía problemas con sus impuestos; que él direccionó los contratos de esa manera, por su manejo tributario, indicando que ya a principios del año 2016 él mismo pidió ya no tener contratos porque eso le generaba problemas con sus impuestos y ellos hicieron lo que él les pidió, tanto que él hizo una carta a una dependencia del gobierno donde declaraba que él efectivamente no laboraba, que sus ingresos provenían de los arrendamientos del edificio Guayabal y de su jubilación; al preguntársele si desde el año 2013 el actor recibía remuneración, contestó *“Nosotros efectivamente le dábamos unas remuneraciones, mejor dicho de acuerdo al contrato se le daba esa remuneración y se liquidó de acuerdo a esa remuneración.”* Acepta que el demandante diseñó una máquina de limpiones en el 2014, así como también, que su esposo recogía al actor para llevarlo a la empresa a las 7 de la mañana y lo llevaba en la tarde, pero sólo hasta el año 2014; que a partir de esa fecha le pagaban al señor Eduardo Moreno, que era del personal de la empresa, para que lo recogiera y lo regresara a la casa. Al preguntársele si desde el año 2013 a la fecha la empresa ha tenido personal dispuesto para desarrollar el diseño industrial de la compañía, respondió: Indicó que no tienen un departamento de diseño Industrial, y explica:

“... tuvimos hasta el 2014 un taller de metalmecánica que tenía la reparación de las máquinas y teníamos mecánicos, resulta que el objeto de vitela es ser productora de telas, entonces para nosotros era muy costoso maquinar una pieza dentro de nuestra empresa por los motivos de tiempo y valor de la operación, era mucho más económico sacar esto de la fábrica, contratar terceros y retornar la pieza que se hubiese dañado o salir directamente a comprarla, eso operativamente, contablemente lo aplicamos a partir del 2014, entonces los pocos mecánicos que había se fueron uno tras otro hasta que en el 2016 ya definitivamente es que ni siquiera teníamos taller de metalmecánica, como actualmente no tenemos taller de metalmecánica.”

Indica que en el 2012-2013 aproximadamente el actor tenía un contrato laboral con Vitela, les ayudaba con eso; que era una dirección ejecutiva porque la parte operativa la hacía otra persona, pero que después los daños que hay de mantenimiento se sacan de la empresa y se paga a terceras personas para que lo reparen, y por eso tomaron la decisión desde el 2014 de desmontarlo paulatinamente.

Como puede advertirse, la representante legal es clara en afirmar que hasta el 2014 el actor manejó el taller de metalmecánica, que en ese año se empezó a desmontar el mismo, se despidieron varios mecánicos, reubicaron las máquinas, y que el taller se cerró definitivamente en el 2016, siendo evidente que solo constituye confesión lo dicho por la interrogada en el sentido que el actor realizó una actividad personal al servicio de la empresa demandada hasta el 2014, año en que comenzó a desmantelarse el taller se despidieron trabajadores, se reubicaron las máquinas, y el actor dejó de manejar el referido taller, como anotó; el hecho de que el taller en mención se hubiera cerrado definitivamente en el 2016 no significa *per se*, que, hasta ese año, el demandante hubiera continuado realizando tal actividad, cumpliendo unas determinadas funciones como empleado, en un horario de tiempo completo, máxime si se tiene en cuenta la calidad de fundador de la empresa y padre de la representante legal que ostenta el actor, de avanzada edad para el año 2015 (más de 80 años), lo que explica las especiales concesiones que tenía en la empresa, por tales calidades, como resalta la declarante, por lo que no le asiste razón a la censura (demandante) cuando pretende que se tenga como confesión, de una actividad personal del actor para la compañía, hasta el año 2016, por parte de la demandada, pues tal confesión, como se señaló, solo cobija hasta el año 2014, como se resaltó.

De otro lado, el demandante, señor Manuel Adán Moreno Montoya, en el interrogatorio que absolvió, indicó que tiene 90 años de edad, y es diseñador de maquinaria; se resalta que, al ponérsele de presente el documento visible a folios 80, enviado a la tesorería de Medellín, indicó que no lo realizó, que seguramente lo realizaron sus hijas, que él les firmaba todo a ellas, pero que la firma no es suya. Reconoce su firma en las dos liquidaciones definitivas de prestaciones obrantes a folios 73 y 74 del expediente. Al preguntársele si hasta

el año 2013 tenía un contrato de trabajo con la sociedad demandada, indicó que era cierto, y ante los cambios en la contratación, respondió: *“Lo que pasa es que como yo trabajaba para toda mi familia, a mí lo que me llevaban yo la firmaba, de ese documento no me acuerdo.”*

Sobre si tenía horario a partir de 2014, contestó: *“Pues yo era empleado, no tenía horario, yo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante 15 o 20 más años, que mi yerno me llevaba y me recogía en mi casa y por la tarde me dejaba en mi casa”*; que eso fue así hasta 2013, y que de ahí en adelante ya no lo llevaba su yerno porque ya tenían problemas pues él estaba reclamando sus bienes que le habían quitado, y lo siguió llevando su hijo Eduardo Moreno; que a partir de 2016-2017, lo siguió llevando Eduardo pero en un horario diferente pues llegaba a las 8, 8:30 de la mañana y lo llevaba a las 12:30 y ya no volvía. Con relación a las funciones que desempeñaba en la empresa, indicó que es diseñador de maquinaria, que diseño toda la maquinaria de la empresa; que todavía lo hace, aunque poco, que diseñó el horno para poder hacer la tela de colchón, en octubre de 2018, aunque señaló que la máquina ya estaba funcionando y que él les mandó una nota para que economizar gas y también sugirió colocar una campana extractora, pero que no se tuvieron en cuenta y se la devolvieron, aunque no lo del horno.

Al preguntársele si tenía personal a cargo, respondió: *“Sí, yo tenía un muchacho a quien yo entrené allá y lo formé como jefe de mecánica ... Uberlene Osorio y dos o tres ayudante, soldador y un tornero y el hornero cuando faltaba pues yo cogía la máquina y así ha terminado en la pieza que él estaba realizando.”*, agregando que tuvo a cargo este personal hasta 2015-16, indicando al respecto: *“Cómo le digo; me quitaron el personal, lo fueron haciendo a un lado, a un lado y yo me daba cuenta de que ellos tenían la consigna de que oyeran todo lo que yo les decía, pero que no me hicieran caso.”*

Para la Sala, si bien el actor aduce que tuvo a su cargo personal en la empresa hasta 2015 o 2016, término, por demás, muy amplio y por tanto impreciso, reconoce que desde tiempo atrás ya no daba órdenes en el taller, los trabajadores, en sus propias palabras, no le hacían caso, lo que concuerda con

lo dicho por la Representante Legal en el sentido que, en el 2014, el taller ya no estaba bajo el mando del actor, y que incluso, en ese año, éste se desmanteló, se despidió parte del personal, se reubicaron las máquinas, aunque el mismo se cerró en forma definitiva en el 2016, como indicó ésta, de lo que no se infiere que, para esa época, el actor desarrollara una actividad personal continua, permanente para la empresa, menos aún, bajo una relación laboral, como se indicó.

Ahora, el testigo de cargo, señor John Jairo Galvis Orozco, informó que trabajó en la empresa 19 años, hasta el 2015. Señaló que el actor es ingeniero mecánico industrial, y hacía todo lo que es mantenimiento de maquinaria, sacaba planos, diseños para maquinaria industrial para la empresa, que lo vio realizando esas actividades hasta que él, el testigo, se retiró de la empresa a mediados de 2015; que cumplía horario de 8 a 5 de y a veces le tocaba recogerlo y llevarlo a la empresa y al apartamento, lo transportaba. Ante la pregunta sobre si el demandante realizaban esas funciones bajo la dirección de alguien, de un jefe inmediato respondió: *“No le sé decir, trabajaba para la empresa.”* Indica que no sabe cual era su remuneración y, respecto si alguien le imponía un horario, contestó: *“No sé, yo entendía que era el dueño”*; que después de que el declarante se fue de la empresa, el actor siguió trabajando, porque se lo dijo el hijo de éste, que no le consta directamente porque no volvió a la empresa; Refiere que él recibía órdenes del actor, quien lo mandaba a comprar repuestos para la maquinaria o mandaba a hacer piezas, a fundir, porque él era el conductor de la empresa, y que el señor Manuel también le daba instrucciones a los operarios , a los obreros de las máquinas , que lo vio algunas veces.

Para la Colegiatura, el deponente, si bien aduce que vio al actor realizando mantenimiento de maquinaria, sacaba planos, diseños para maquinaria industrial para la empresa hasta mediados 2015, de su dicho no se puede concluir que, concretamente, para los años 2013 en adelante, el actor cumpliera funciones establecidas por la compañía, bajo las ordenes de sus directivos, cumpliendo un determinado horario, impuesto también por la empresa; por el contrario, llama la atención que el testigo considere al actor como “dueño” de la empresa, y que, además, nada diga sobre el

desmantelamiento del taller de metalmecánica, que empezó en el 2014, como indicó la representante legal de la compañía demandada, y que, como se verá, corroborarán los testigos de descargo.

El otro testigo de cargo, Oscar Adolfo Jaramillo Salazar, manifiesta que conoce al actor desde hace 14 años, y que éste era el propietario de la empresa Productos Vitela, donde trabajó el declarante del año 2005 al 2006; que el actor estaba pendiente de toda la línea de producción, de los operarios, de los mecánicos y les daba órdenes; que él, el declarante, tenía varios oficios, a veces como operario cuando había fibra una de las máquinas, de conductor, de transporte de mercancía; que don Manuel siempre llegaba tipo 7 -8 de la mañana y se retiraba de la empresa 4-5 de la tarde; que en el tiempo que estuvo laborando en la empresa, el actor era el que daba las órdenes para todo; que después de 2013 lo llevó varias veces varias veces, cuando Eduardo Moreno no lo podía transportar, en estos últimos años, unas 8 y 10 veces; que lo recogió 4-5 de la tarde y que el año pasado lo recogió dos veces, a mediodía.

Como puede advertirse, este testigo solo trabajó hasta en la empresa demandada hasta el año 2006, por lo que no tiene un conocimiento directo de los hechos relevantes en esta litis.

Ahora, la señora Mónica María Hincapié Rivera, testigo presentada por la parte demandada, jefe de gestión humana y comercio exterior en Vitela, señaló que conoce al demandante desde hace 12 años; que era el fundador y laboraba en la empresa; que cuando ella ingresó a la empresa el actor era el jefe de mantenimiento, más o menos hasta el 2014; que él se encargaba, en el taller, de mantenimientos preventivos, correctivos y hacer piezas para las maquinarias; que el taller funcionó correctamente hasta mediados de 2014; que don Manuel continuó yendo a la empresa, por horas, tenía su oficina, una oficina cómoda, con teléfono, televisión, neverita, una silla reclinomática y ahí descansaba y hacía sus cositas; que de pronto iba a planta y hablaba con los muchachos y volvía a su oficina; que cuando funcionó el taller él nunca cumplió horario, por ser el fundador y dueño de la empresa; que después de que cerraron el taller, él iba menos, iba por ahí dos o tres horas y se iba, y no tenía

personal a cargo. Refiere que tuvo a cargo a Huber Osorio, jefe de los mecánicos, Edgar Montoya como tornero y dos auxiliares de mecánica y electricidad; que después que se acabó el taller, solo una persona quedó; Huber Osorio, pero ya no estaba en el área de mantenimiento. Señaló que señor Manuel Adán no intervino en el proceso de sacar la nueva línea de productos para telas de colchón, que fue el señor José quien montó y desarrolló esa tela, el jefe de producción. Indica que al actor se le canceló el contrato que tenía y se le liquidó totalmente; que él tenía muy buena relación con sus hijas, lo trataban super bien, cuidaban mucho de él, estaban pendientes de que lo que necesitará y que llegaron a un acuerdo, para poder justificar los gastos de manutención en la empresa, que se hacía un contrato por servicios, por un valor de \$8.000.000, y que lo sabe por ser ella jefe de gestión humana, hasta el 2015 más o menos, 2015-2016 y ya, ahí terminó todo, pues la relación entre ellos se dañó.; precisa que, desde el 2014, cuando el taller se terminó, no tenía funciones y así continuó hasta que dejó de asistir, hace por ahí un mes; que de pronto él podía hacer recomendaciones, pero que no tenía función y labor en Vitela.

Y el otro testigo a instancias de la demandada, señor Jorge Eliécer Estupiñán Rivera, gerente de la firma de revisoría fiscal en Vitela, señaló que conoce al actor desde hace más de 40 años, y hace unos 12 o 13 años llegó a la empresa Vitela; que Don Manuel es el fundador de la empresa, en ese momento, trabajador de la parte del taller, resaltando que no era un trabajador tradicional porque no tenía un horario, y las relaciones de familia eran excelentes, tenía su oficina, tenía todo; que hasta el 2012 estuvo como trabajador vinculado y lo liquidaron y en el año 2014 tuvo un contrato por servicios y luego, 2015-2016, se vinculó laboralmente porque, con honorarios, el municipio lo estaba molestando por el impuesto del ICA; que estuvo vinculado 2015-2016, pero lo volvieron a liquidar, le pagaron sus prestaciones sociales, igual que en el 2012 cuando cancelaron contrato; que tiene conocimiento de ello porque es el revisor fiscal de la empresa; que si bien es una firma, el que va, dos o tres veces, a la empresa; que en el 2013, no siempre vio al actor. Sobre la función que desempeñaba don Manuel a partir del año 2013 en la sociedad, señaló que él estaba con unas investigaciones del

trabajo, de un producto, que no tenía una responsabilidad grande de todo el manejo de la empresa ,de producción, indicando que estaba allá en investigaciones para la empresa; al indagársele sobre si el actor a lo largo de 2013 y a la fecha de su declaración desempeñó actividades y funciones en la empresa, respondió que no, que el señor Manuel no tiene ninguna representación legal de la empresa, ningún cargo administrativo, y no tiene que responder por funciones.

Insiste el deponente que el señor Manuel no era que trabajara tan directamente en el taller, que él iba para efectos del estar y por la unión que había con la familia, pero no era que tuviera una obligación, pues él por su edad y por la organización que tiene la empresa, que las hijas eran las que manejaban administrativa y financieramente todo, don Manuel no estaba más en el taller, y si él no iba no había ningún problema; indica que en 2016 se le pagaban unos honorarios, y después, por situaciones de familia, él sale de la empresa; que cree que en el 2017 dejaron de pagarle por problemas de familia, porque era una plata que le daban para la manutención, y que ya por las situaciones que se presentaron en el 2016 le liquidan su contrato que tenía.

Refiere que el actor estuvo trabajando en asunto muy personal, quería sacar una tela de muy bajo peso, pero que fue un producto que no dio resultado, más por tener algo que hacer, unas investigaciones, que las hijas le tenían una oficina allá y le tenían todo para que trabajara, no conoce investigaciones de otros productos. Al preguntársele si estuvo presente o conoció directamente la negociación del contrato de prestación de servicios que se dio entre Manuel Moreno y Productos Vitela, respondió: *“Ese contrato fue para cubrir parte de la manutención que las hijas le pagaban.”*

Para la Colegiatura, estos testigos presentados por la parte demandada son coincidentes, serios, responsivos, y sus dichos ofrecen credibilidad; de sus declaraciones se evidencia que el actor trabajó para la empresa, como jefe del taller de metalmecánica, hasta el año 2014, fecha en que dejó de funcionar correctamente dicho taller, como señaló la señora Hincapié Rivera, dando cuenta de las especiales condiciones en que se desarrolló la relación del actor con posterioridad a ese año, con las directivas de ésta, concretamente con sus

hijas, una de ellas la representante legal de la compañía, y sin olvidar la calidad de fundador que éste ostentaba.

Ahora, como bien coligió la a quo, luego de haberse liquidado el contrato de trabajo que tenía el actor con la empresa, el 31 de diciembre de 2012, relación laboral que no está en discusión, el actor siguió realizando la misma actividad personal para la compañía, como jefe del taller tantas veces mencionado, y si bien se firmaron sendos contratos de prestación de servicios, el 2 de ellos en abril de 2013, la demandada no acreditó que se hubiere presentado una interrupción de dichas actividades, entre el 31 de diciembre de 2012 al 2 de abril de 2013, como tampoco, que la labor desempeñada por el actor hasta diciembre de 2014, como jefe del taller, no fue de carácter subordinado, carga que le correspondía pues, al probarse por parte del actor la actividad personal en favor de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2014, se activó la presunción de que trata el artículo 24 del CST, correspondiendo a la pasiva desvirtuar dicha presunción, y no lo hizo.

Cabe señalar que lo dicho por el actor en la misiva obrante a folio 80, dirigida a la Tesorería de Medellín, de fecha 9 de marzo de 2016, en el sentido que prestó una asesoría técnica desde enero de 2013 a diciembre de 2014 y que desde esa fecha no presta asesoría a Productos Vitela, agregando que lo vincularon el 1 de septiembre de 2015 que terminó el contrato el 29 de febrero de 2016, y que en la actualidad, es decir, para la fecha de la comunicación, no tiene empleo ni presta asesoría, no desvirtúa la relación laboral existente entre el actor y la demandada del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, tal como lo declaró la A quo en la sentencia que se revisa, pues es evidente que, para ese momento, el actor se refería a los contratos de prestación de servicios a que se hizo referencia, que disfrazaban una relación laboral, como concluyó la falladora primaria, en virtud de la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, decisión que la Sala considera acertada; no obstante, tal manifestación sí da luces sobre la fecha que terminó el contrato de trabajo que unía a las partes desde antes del 2010, que lo fue en diciembre de 2014, comunicación que da cuenta de una interrupción de casi 9

meses hasta la firma de un nuevo contrato de trabajo, el 1 de septiembre de 2015 que terminó el 29 de febrero de 2016 que, más allá que se discuta por la demandada que fue simulado, lo cierto es que el mismo se liquidó en debida forma, como se aprecia en las liquidaciones de prestaciones sociales obrantes a folios 73 y 74 del plenario, y corresponde a un nuevo contrato laboral, por lo que no le asiste razón al apoderado de la demandante al aducir que la relación laboral no terminó en diciembre de 2014 sino que se mantuvo sin solución de continuidad, incluso un mes antes de presentarse la demanda.

Ahora, acreditada la relación laboral hasta el 31 de diciembre de 2014, y que ésta inició con anterioridad a 2010, es claro que el demandado tiene derecho a que se le cancelen las acreencias debidas, como cesantías y vacaciones, que no cobijó el fenómeno de la prescripción declarada por la A quo, prima de servicios, intereses a las cesantías, y la indemnización moratoria por la no consignación de cesantías en un fondo para tal fin, estas últimas respecto de las cuales operó parcialmente el fenómeno de la prescripción, como dispuso la falladora primaria, resaltando la Colegiatura que la inconformidad del apoderado de la demandada en el recurso de apelación respecto de estas condenas lo fue porque, en su criterio, no se acreditó relación laboral del actor con la compañía demandada a partir de enero 1 de 2013, punto sobre el cual, como se analizó, no le asiste razón, por lo que releva a la sala de pronunciarse sobre si estas prestaciones fueron bien liquidadas o no por la A quo, y si el término prescriptivo, a partir de los 3 años anteriores a la presentación de la demanda, estuvo bien aplicado, pues, a juicio de la Sala, en realidad se observa que la falladora contó cuatro años, pues el libelo genitor se presentó el 24 de octubre de 2017 y la prescripción se declaró a partir del 24 de octubre de 2013 hacia atrás, punto que, como se indicó, se dejará incólume pues no fue objeto de apelación por la demandada.

Por último, con relación al punto de apelación de la parte demandante, atinente a la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que considera su apoderado se debe liquidar no en forma conjunta, sino en forma individual, por cada período anual, en forma independiente, es pertinente

señalar que la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de que se presenta la omisión de consignar las cesantías por varios períodos anuales, no calcula la sanción moratoria por cada uno de los años, en forma independiente, como pretende el recurrente, sino que se unifican los periodos, contando desde el primer periodo en mora hasta la terminación del vínculo laboral, teniendo en cuenta, eso sí, los salarios de cada uno de ellos, para luego sumar los resultados de cada anualidad. Ver entre otras, las sentencias con radicación 49738 del primero de marzo de 2017, SL1451 del 25 de abril de 2018, por lo que no le asiste razón al demandante sobre este punto, por lo que se confirmará también lo decidido por la A quo al respecto.

Por lo todo lo anterior, se confirmará en su integridad la sentencia que por apelación se revisa, sin condena en costas en esta instancia al no haber prosperados los recursos de apelación interpuestos por las partes.

VIII.-DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, por lo señalado en la parte motiva.


SEGUNDO: SIN COSTAS procesales en esta instancia, por lo indicado en la parte motiva.

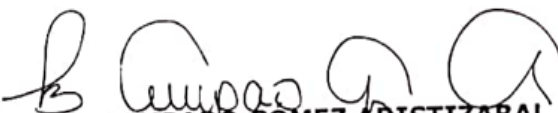
TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **079** del **10 de mayo de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>